

Editorial

La estrategia presidencial de la paz

El 31 de julio se cumplieron seis meses del proceso de cumplimiento de los acuerdos de paz. A esa altura debieran haber estado concluidos o en pleno desarrollo 92 de 117 compromisos, además de los incluidos en los acuerdos de San José y Nueva York. A los cien días de firmado el Acuerdo de paz se produjo la primera crisis, la cual comenzó a superarse un mes más tarde, gracias a la intervención de Naciones Unidas y a través de un mecanismo de concertación directa entre las partes. En ese entonces, se hicieron reajustes en el calendario, de tal modo que, el 15 de julio, los retrasos principales debieran haber estado corregidos, permitiendo así avanzar sobre otros puntos postergados.

A comienzos de agosto, el FMLN comenzó a señalar la aproximación de una nueva crisis; ONUSAL habló de un impasse en los puntos recalendarizados, pero para el gobierno del presidente Cristiani la situación era normal.

Es innegable que se resolvieron varios puntos importantes cuyo retraso generaba mucha desconfianza entre las partes y en la comunidad internacional. Entre esos puntos cabe destacar la reinserción en la vida civil del primer contingente de ex combatientes del FMLN, la abolición de la Guardia Nacional y de la Policía de Hacienda y los primeros pasos para hacer la transferencia de tierras y legalizar al FMLN como partido político. No obstante la trascendencia de estos pasos, ellos representan el mínimo necesario para mantener el proceso en marcha y la confianza en sus resultados.

Si bien es cierto que estos logros muestran que la nueva crisis también es superable y el avance posible, asimismo evidencian una voluntad política para mantener el nivel de ejecución de los acuerdos al mínimo. Las nuevas medidas adoptadas por las partes a mediados de agosto para relanzar la ejecución de los acuerdos confirman que el punto clave está en la voluntad política de las partes, pero sobre todo del gobierno, que es la parte que más

Cuál es el papel real del presidente Cristiani en la consolidación de la paz y la democracia y hasta dónde llega su voluntad política.

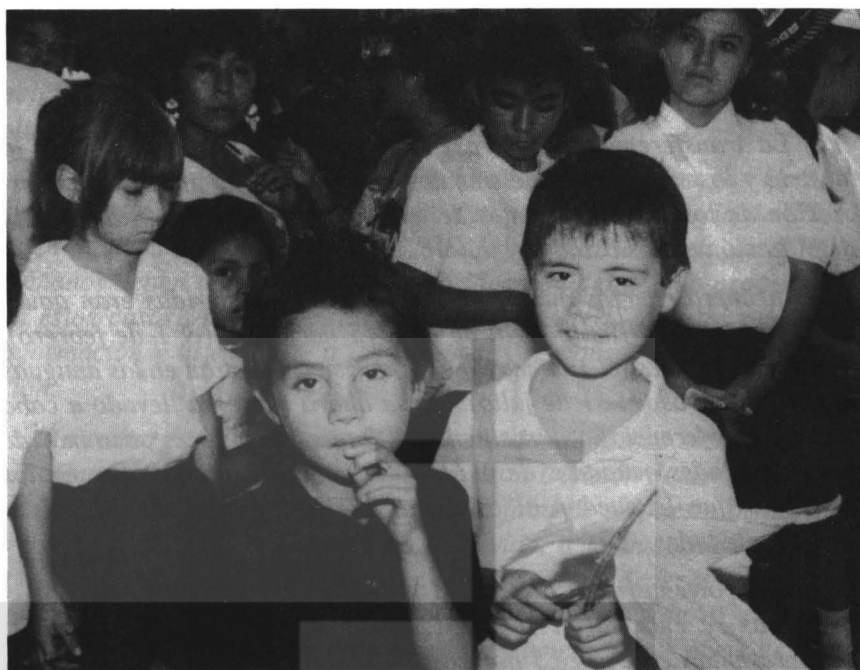
compromisos adquiridos tiene y la que menos ha cumplido.

Más aún, al recorrer la lista de los acuerdos no cumplidos y las medidas que deberán adoptar el gobierno y el FMLN a partir del 19 de agosto, la mayoría de ellos depende del poder ejecutivo, es decir, del presidente Cristiani. Aparentemente, la participación personal del presidente en la mesa de negociación antes y después de la firma del Acuerdo de paz ha influido para obtener resultados. Pero si la mayoría de los acuerdos no cumplidos y, en consecuencia, las medidas adoptadas para corregir tales incumplimientos dependen directamente de su gestión ejecutiva, su voluntad política y su compromiso con la paz y la democracia en El Salvador aparecen cuestionados gravemente. Por consiguiente, ha llegado el momento de preguntarse cuál es el papel real del presidente Cristiani en la consolidación de la paz y la democracia y hasta dónde llega su voluntad política.

1. Las áreas críticas del proceso

El avance del proceso de cumplimiento de los acuerdos se ha encontrado con las siguientes áreas críticas: el cese del enfrentamiento armado, los programas de reinserción de los ex combatientes, la transferencia de tierras, el financiamiento externo, el foro económico social, la Policía Nacional Civil y la Academia Nacional de Seguridad Pública, el restablecimiento de la administración pública en las antiguas zonas de conflicto, la seguridad pública y los derechos humanos, el servicio militar y de reservas y, finalmente, la legislación pendiente. El 19 de agosto, las partes llegaron a un nuevo acuerdo sobre cómo superar las crisis surgidas en estas áreas. Los elementos fundamentales de dicho acuerdo son los siguientes.

(a) El cese del enfrentamiento armado no estaba concluido, debido a que el FMLN aún no había concentrado a todos sus ex combatientes en las zonas designadas. Estos deben ser reincorporados en la vida civil y sus armas correspondientes deben ser depositadas en las fechas indicadas. Según el nuevo calendario, el segundo contingente se desmovilizará el 21 de septiembre y el último, el 31 de octubre. El FMLN había detenido este proceso de desmovilización y reincorporación para presionar al gobierno a cumplir con su parte, pues no consideraba apropiado un cumplimiento unilateral. Aparte de que existe el convencimiento de que, pese a la desmovilización del primer contingente, la estructura militar, humana y material, del FMLN aún sigue intacta.



(b) Cuando se negoció la reprogramación del calendario a mediados de junio, las partes acordaron un paquete de "emergencia", destinado a beneficiar a los ex combatientes reincorporados a la vida civil. Este paquete es de lo más variado y comprende documentación, enseres básicos, asistencia técnica, aperos de labranza agrícola, transferencia de tierras, dotación de vivienda y rehabilitación de los lisiados de guerra. Estos programas deben beneficiar a más de 70 mil ex combatientes, unos 47 mil del FMLN y más de 20 mil que de la Fuerza Armada.

El primer contingente de ex combatientes del FMLN se desmovilizó e incorporó a la vida civil sólo con la promesa de los programas de emergencia, pero al no encontrar ningún apoyo, muchos de ellos regresaron a los campamentos de donde habían salido. En las filas de los ex soldados dados de baja también hay creciente descontento por la falta de apoyo gubernamental.

Pese a la necesidad de desarrollar estos programas para hacer factible la reincorporación de los ex combatientes y ex soldados, sólo se han puesto en marcha los de documentación y reparto de enseres básicos y de labranza. De hecho, habiendo dinero para financiarlos, estos son los programas más fáciles de ejecutar, puesto que no tocan las estructuras fundamentales de la sociedad salvadoreña, y son los más llamativos desde el punto de vista propagandístico. Aunque estos repartos no resuelven el futuro de los ex combatientes y contribuyen en poco a aliviar su precaria situación, el gobierno se ha comprometido a continuar con ellos,

cada vez que se desmovilice un nuevo contingente. Los repartos también beneficiarán a los ex combatientes del ejército y a los lisiados del FMLN.

(c) La transferencia de tierras, el crédito para la agricultura y la industria y los servicios son elementos básicos para facilitar la reincorporación de los ex combatientes de ambas partes, así como también la rehabilitación de los lisiados y la formación.

Las primeras tierras que debían haber sido transferidas eran aquellas que exceden el límite legal de las 245 hectáreas (el 1 de febrero), según las estatales (el 1 de mayo) y las que se encuentran en las antiguas zonas conflictivas (el 31 de julio). Hasta ahora no se ha llevado a cabo ninguna transferencia, a duras penas se han verificado un poco más de cien propiedades ocupadas después de la firma de los acuerdos. En los tres meses que le quedan al calendario original se deberán verificar 4,600 propiedades.

Según el inventario depurado del FMLN, sólo en las antiguas zonas conflictivas se encuentran comprendidas cerca de 385 mil manzanas, que representan casi el 18.5 por ciento del territorio nacional. Un área equivalente al área total afectada por la reforma agraria en 1990. De esta manera, aquí se encuentra en juego una distribución de tierra cuya extensión supera todas las que se han hecho en las últimas décadas. Este compromiso sí afecta radicalmente una de las estructuras básicas de la sociedad salvadoreña y, en consecuencia, ahí reside la reticencia inicial del gobierno del presidente Cristiani.

Ahora bien, a éste no le ha quedado más alternativa que aceptar la verificación, establecer las condiciones especiales de transferencia a los tenedores y a los ex combatientes, así como otorgar los créditos necesarios. En el proceso se dará prioridad a los ex combatientes del FMLN, lo cual obviamente también facilitará su reincorporación a la vida civil. Los ex combatientes de la Fuerza Armada serán beneficiados con un programa similar.

(d) Para que la Policía Nacional Civil pueda desplegarse pronto, el gobierno se ha comprometido a evaluar a los ex miembros de la Policía Nacional que deseen ingresar en la Academia Nacional de Seguridad Pública, tendrá disponibles y acondicionados dos locales, debe asegurar el ingreso sucesivo de los cursos y el egreso de las dos primeras promociones en marzo de 1993, debe seleccionar los mandos provisionales de la policía, conseguir el local definitivo para la Academia Nacional y proporcionar los fondos necesarios del presupuesto general.

(e) El gobierno, a través del director de la Policía Nacional Civil, debe definir y poner en práctica el régimen especial de seguridad en las

antiguas zonas conflictivas. Para ello contará con los buenos oficios de ONUSAL, la cual consultará con el FMLN. Además, el gobierno está obligado a asegurar la vigencia del régimen especial hasta que se despliegue la nueva policía.

(f) El gobierno se ha comprometido de nuevo a investigar las violaciones de los derechos humanos que, a su criterio o a criterio del FMLN, estén motivadas políticamente. ONUSAL y la procuraduría de derechos humanos deben dar prioridad a la verificación del debido proceso legal en estos casos. Asimismo, se ha facultado a ONUSAL para que recabe información y la entregue a las instancias responsables de la investigación.

Sin embargo, esta es una de las áreas donde menos se ha avanzado, tal como lo denuncia el quinto informe de la División de derechos humanos de ONUSAL, que sigue señalando la falta de respuesta institucional frente a la protección del derecho a la vida, a la integridad y a la seguridad de la persona. Tampoco se han producido progresos significativos en la investigación de los atentados contra la vida ni en la erradicación de las prácticas de intimidación y amenaza por parte de grupos clandestinos organizados.

(g) Al fin, el gobierno parece haber comprendido que la restauración de la administración pública en las antiguas zonas de conflicto sólo será posible si está mediada por el diálogo y la cooperación entre las autoridades locales y las organizaciones comunales de las respectivas municipalidades. Si bien el FMLN también se ha comprometido a ejercer su influencia para que la actividad de los alcaldes y jueces no sea obstaculizada, el gobierno debe promover canales de comunicación apropiados. En ningún caso se debe buscar la supresión de las organizaciones comunales existentes.

(h) El gobierno se ha comprometido a promover la incorporación del sector privado en el foro de concertación económico social, pues hasta ahora había estado de acuerdo con la negativa de aquél a participar. El mismo presidente Cristiani ha sido excesivamente condescendiente con las posturas inflexibles de la gran empresa privada. De hecho, la negativa de ésta y la pasividad de aquél han paralizado el foro. Sin embargo, el gobierno se ha comprometido a comenzar la discusión del código de trabajo sólo con el sector laboral, si el sector privado persiste en su negativa.

(i) El gobierno debe promover las medidas legislativas para adecuar la Ley de servicio militar y de reservas a los términos del acuerdo, suprimiendo el servicio territorial y explicitando que el nuevo régimen es ajeno a cualquier función de seguridad pública o control poblacional o territorial.

(j) *El gobierno debe continuar sus acciones sistemáticas para captar recursos internacionales con los cuales financiar los compromisos adquiridos. El FMLN, por su parte, coadyuvará en la consecución de estos recursos.*

Mientras el FMLN señalaba con anticipación los indicios de lo que sería la segunda crisis del proceso, el gobierno sólo admitía la existencia de problemas, añadiendo a continuación que éstos tenían solución. La propaganda gubernamental se ha esmerado en crear una sensación de normalidad en relación con el cumplimiento de los acuerdos, ocultando a la opinión pública su falta de compromiso. En efecto, los funcionarios gubernamentales, incluido el mismo presidente, han proyectado una imagen de compromiso total con el proceso. Exceptuando a algunos voceros militares, en las intervenciones públicas de estos funcionarios no ha habido exabruptos; incluso las acusaciones contra el FMLN se han caracterizado por la moderación. Con tranquilidad pasmosa hablan de paz y democracia, pero sin poner los medios para que ambas sean realidad en El Salvador.

La otra cara del discurso gubernamental acusaba al FMLN de incumplimiento por la existencia de los grupos armados que asumieron la seguridad pública en las antiguas zonas conflictivas, por las dificultades encontradas por las autoridades locales para tomar posesión de sus cargos municipales y por la mala calidad y la poca cantidad de armas entregadas al desmovilizar el primer contingente. Todo ello dirigido a aumentar el recelo y la sospecha en la población hacia el FMLN. Es la misma desconfianza visceral que difunden los grupos clandestinos de la extrema derecha contra el FMLN y los acuerdos.

La tranquilidad gubernamental se vuelve indiferencia en el ámbito de los derechos humanos, pues la pasividad actual del gobierno ante las cada vez más frecuentes actividades y víctimas de los escuadrones de la muerte y los delincuentes comunes es la misma que mantuvo durante la guerra. Igual actitud muestra ante los grupos clandestinos de la extrema derecha que amenazan e intimidan, protegidos en el anonimato. La indiferencia y la pasividad del gobierno permiten que aún predomine la impunidad. Si el gobierno actuara de acuerdo a su mandato constitucional, pronto veríamos en los tribunales de justicia a los responsables de estos crímenes.

Las medidas acordadas en el calendario revisado por las partes el 19 de agosto demuestran que el proceso de cumplimiento de los acuerdos se había entrampado y que la mayor responsabilidad en dicho entram-

ARENA no está interesado en el cumplimiento de los acuerdos, sino en ganar las próximas elecciones.

pamiento es del gobierno del presidente Cristiani.

2. La crisis favorece al gobierno

El Secretario Adjunto para Asuntos Especiales de Naciones Unidas Marrack Goulding desenmascaró la posición gubernamental al llamar la atención a las dos partes para que demuestren con hechos su voluntad de paz, enfatizándoles que ya está bien de discusiones y debates. Goulding subrayó que ha llegado el momento de actuar y presentar resultados concretos, para lo cual a ambas partes les queda poco tiempo. Dado que el gobierno es el que más compromisos tiene, el que menos ha cumplido y el que más retrasos ha acumulado, el reproche de Goulding va más dirigido a él que al FMLN.

Las partes tienen un mes, hasta mediados de septiembre, para presentar los resultados del calendario revisado. Goulding regresará al país el 16 de septiembre para evaluar sobre el terreno los logros y su evaluación será utilizada para que el Secretario General haga recomendaciones al Consejo de Seguridad. Este mes es un tiempo para que las partes pongan a producir su voluntad política. Pero, como en ocasiones anteriores, el que más tiene que trabajar es el presidente Cristiani.

Si todos los problemas del proceso tienen solución, tal como lo repite el presidente Cristiani, y la mayor parte de ellos dependen del poder ejecutivo, por qué se llegó a una situación de crisis o a un impasse peligroso. Si hubiera habido voluntad política, la mayoría de los acuerdos debieran estar en desarrollo, aun sin contar con las condiciones óptimas ni con todo el financiamiento necesario. La decisión clara de cumplir y los primeros pasos en esa dirección hubieran generado confianza e impulsado más aún el proceso. Basta una indicación o una orden presidencial para que el gobierno actúe y ponga al día el calendario de compromisos. Si tomamos la palabra al presidente sobre la solubilidad de todos los problemas, ¿por qué éstos no han sido resueltos? ¿Qué sentido tiene



agotar el tiempo y el espacio político disponibles para cumplir a última hora?

La primera respuesta está en las razones ideológicas y políticas. Ideológicamente, al presidente le gustaría hacer prevalecer el principio absoluto de la propiedad privada e individual, defendido por el gran capital salvadoreño y por su partido. Este principio hace prácticamente muy difícil encontrar formas viables para transferir y poseer la tierra de tal manera que todos los ex combatientes con vocación campesina sean beneficiados. La obcecación ideológica impide ver que el sector reformado es igualmente eficiente que el no reformado en productividad física. En el sector reformado, las formas colectivas de tenencia tienen rendimientos superiores que las individuales e incluso que el llamado modelo especial de adjudicación individual, establecido por el gobierno de ARENA (Proceso, 1992, 525).

Políticamente, el gobierno de ARENA no ve con buenos ojos que los ex combatientes de ambas partes tengan acceso a la tierra, al crédito y a la asistencia técnica, porque piensa que ello consolidaría la base social del FMLN. Conceder al FMLN este triunfo social tendría un costo político muy elevado para el partido oficial y también para el presidente. Por lo tanto, ambos estarían dispuestos a sacrificar el bienestar de los ex combatientes con vocación campesina antes que coadyuvar a la consolidación política del FMLN. En efecto, ejecutar este compromiso del Acuerdo de paz, una necesidad muy sentida por las mayorías populares y una de las raíces de la guerra, podría significar un aumento de la popularidad, y tentativamente un incremento del número de votos, del FMLN. Pero esto no es del todo cierto, porque la popularidad no se convierte en votos automáticamente.

A la misma motivación ha obedecido la demora, hasta el límite de lo permisible, en la remoción de las barreras legales que impedían la inscripción del FMLN como partido político en el Tribunal Supremo Electoral. Entorpecer las actividades políticas del FMLN sólo favorece a ARENA y a los pequeños partidos de la derecha que se pliegan a su política; facilitar su actuación política desde el punto de vista legal es favorecer al que probablemente será el adversario electoral más fuerte del partido gobernante en el futuro próximo.

La lentitud con la que se ha procedido en el área de la Policía Nacional Civil y en la seguridad pública prolonga la inseguridad y la inestabilidad social de la época de la guerra. Es más difícil movilizar a una población atemorizada que a una que vive sabiendo que sus derechos ciudadanos están garantizados. La inseguridad pública generalizada y tolerada por el gobierno de Cristiani puede estar motivada en un intento para provocar un clamor profundo por una autoridad fuerte que reprima

violentamente. Sería una forma solapada para reclamar el regreso de la presencia del ejército en las estructuras de seguridad pública.

Por otro lado, la inseguridad general impide que las organizaciones populares puedan ampliar y consolidar sus estructuras. Es indudable que los avances en la policía y en la seguridad pública generarían una mayor participación social de las mayorías populares, que comenzarían a exigir trabajo, más y mejores servicios públicos, etc. Aunque esta movilización popular no necesariamente debe ser hegemonizada por el FMLN —tampoco conviene—, abriría un nuevo frente en el punto más débil del gobierno de ARENA, obligándolo a prestarle una atención más seria y al cual, en teoría, no podría reprimir con los antimotines.

La extrema derecha militar y civil es un capítulo aparte. Rechaza completamente los acuerdos, a los que considera una entrega incondicional y una traición. Más aún, estaría esperando la salida del país de Naciones Unidas para restablecer el orden y las prácticas del pasado. Para ello cuenta con que las estructuras de poder quedarán intactas. Para este sector, el proceso de cumplimiento de los acuerdos es un mal momento, lo acepta como algo irremediable, pero pasajero.

3. De qué lado se encuentra el presidente Cristiani

La propaganda nos ha presentado un presidente comprometido con la paz y la democratización de El Salvador. Los reconocimientos internacionales y los primeros premios concedidos exclusivamente al presidente tienden a configurar la imagen de un gran estadista. La propaganda ha sabido manejar la imagen presidencial, presentando a Cristiani por encima de las partes que negociaron, firmaron y ejecutan el Acuerdo de paz.

Del lado gubernamental, los ministros y los altos oficiales de la Fuerza Armada son los primeros que bajan a la palestra política, y, por lo general, lo hacen para introducir la desconfianza y la intranquilidad en el proceso, demostrando su falta de compromiso con la paz y la democracia. Esta falta de compromiso es la que ha impedido avanzar más rápidamente en la obtención de resultados. Mientras tanto, el presidente se mantiene alejado de la polémica entre las partes. Sus intervenciones en la mesa de negociación y en público son cuidadosamente calculadas, pero, en buena medida, obedecen a las presiones internas y externas.

Si bien el presidente Cristiani cuenta con un apoyo fundamental dentro de su partido, del capital y del alto mando de la Fuerza Armada, que le permitió firmar el Acuerdo de paz, no tiene un cheque en blanco para cumplir con los compromisos adquiridos en los acuerdos, sino que está sometido a las presiones ejercidas por todos estos sectores de la dere-

Es claro, por lo tanto, que el presidente Cristiani cumplirá los acuerdos, pero sólo si es sometido a fuertes presiones.

cha. Los más duros e inflexibles han intentado repetidamente bloquear el cumplimiento de los compromisos; los más abiertos han querido tergiversarlos o reducirlos a una mera formalidad. Así se explican las dos crisis y el considerable retraso acumulado. Al cual, el FMLN también ha contribuido al negarse a cumplir unilateralmente.

Al no tener un poder suficiente para cumplir satisfactoriamente con el texto y el espíritu de los acuerdos, el presidente Cristiani permite que la oposición derechista exprese sus puntos de vista y luche por sus intereses hasta que choca con la oposición firme del FMLN y con la no tan firme de las fuerzas políticas y sociales del país, así como con el rechazo de la comunidad internacional. Cuando estos sectores opuestos a los acuerdos pierden la batalla, el presidente interviene en la mesa de negociación que controla la ejecución del Acuerdo de paz.

Estas intervenciones presidenciales no se caracterizan por la resolución rápida y firme de las áreas críticas. En sesiones maratónicas, Cristiani discute hasta el último detalle cada uno de los compromisos pendiente o cuestionado, en un intento por no concederle todo. Al final, acepta lo comprometido, pero nunca antes de experimentar la fuerza argumentativa del FMLN y la presión internacional. Es claro, por lo tanto, que el presidente Cristiani cumplirá los acuerdos, pero sólo si es sometido a fuertes presiones.

Esta compleja postura presidencial debe ser entendida desde la falta de un apoyo masivo y total por parte de ARENA, de la Fuerza Armada y del gran capital, y por las convicciones e intereses del mismo presidente Cristiani y su círculo.

El interés primordial de ARENA no es El Salvador, tal como dice una de sus consignas más difundidas, sino el partido y la defensa a ultranza de su visión ideológica. ARENA no está interesado en el cumplimiento de los acuerdos, sino en ganar las próximas elecciones. Su triunfo debe ser total porque, si no llega a obtener el control de la asamblea y de las municipalidades, le será prácticamente imposible gobernar sin alianzas y compromisos. Si esta llegara a ser la situación, su programa político, que promueve y defiende los intereses de la derecha y del capital, tendrá que sufrir, indudablemente, modificaciones importantes ante las demandas de la oposición. Desde esta perspectiva exclusivamente partidista es comprensible que la gestión de ARENA, como partido y como gobierno, esté dirigida sobre todo a consolidar su programa político con un nuevo triunfo electoral y a impedir que la oposición no sólo no llegue al poder, sino que no avance posiciones importantes en esta dirección.



La Fuerza Armada en su conjunto no está a favor de los acuerdos. Existe un sector favorable a ellos lo suficientemente representativo como para arrastrar al resto. Pero incluso este sector no parece estar dispuesto a llevar la desmilitarización hasta sus últimas consecuencias ni a poner fin a la impunidad. Dentro del ejército se perciben maniobras para no alterar las estructuras que permitieron la hegemonía militar sobre la sociedad civil y, claramente, se percibe la falta de voluntad para confesar la verdad sobre las violaciones de los derechos humanos.

El capital representado en ANEP se ha negado a participar en el foro de concertación económico social, alegando la violación de la ley, con lo cual se ha arrogado facultades que no le corresponden. El gobierno y el presidente mismo han aceptado pasivamente esta postura, incapacitados para defender la legalidad del país. Por otro lado, el sector del capital al cual pertenece Cristiani tampoco comparte algunos de los aspectos políticos cruciales de los acuerdos, concretamente aquellos que contradicen el modelo neoliberal vigente y los que aparentemente favorecerían la consolidación de la base social del FMLN.

El FMLN se perfila como el adversario político más importante de ARENA, tal como lo empiezan a mostrar las encuestas de opinión pública (ver Documento especial). Aunque el FMLN no obtuviera votos suficientes para llegar a la presidencia —lo cual, por el momento, ARENA parece tener asegurado—, bien podría adquirir una fuerza política formidable si logra algún tipo alianza electoral firme con la oposición política más significativa, impidiendo así un nuevo gobierno absoluto de ARENA.

En estas circunstancias, el proceso de cumplimiento de los acuerdos no puede menos entonces, que ser utilizado para desgastar el poder social del FMLN y para restringir su actividad política. De esta forma, el proceso de pacificación ha sido politizado en el peor de los sentidos y está siendo utilizado para servir intereses de sectores particulares y como un instrumento poderoso de la lucha política y electoral de la derecha.

En el cumplimiento de los acuerdos deben predominar los intereses generales de la nación, tal como se encuentran expresados en el Acuerdo de paz. Por lo tanto, debe exigirse la distinción estricta entre el interés de El Salvador y los intereses particulares de la derecha. Ninguno de estos intereses se identifica mecánicamente con los de El Salvador.

Tampoco se identifican necesariamente los del FMLN. Sin embargo, su programa político es más afín al del Acuerdo de paz. Por eso, el FMLN se identifica más con los acuerdos y defiende su cumplimiento cabal. Esta coincidencia fundamental entre los intereses políticos y sociales del FMLN y del Acuerdo de paz es percibida correctamente por todos aquellos que se oponen al cumplimiento de sus compromisos. Sin embargo, esa coincidencia indica que el FMLN se encuentra en el camino correcto. En consecuencia, la derecha y sus aliados deberían preguntarse por qué los acuerdos trabajan en contra de sus intereses. No olvidemos que, curiosamente, el Acuerdo de paz y el programa político social subyacente han sido avalados por Naciones Unidas y también, en alguna medida, por Estados Unidos.

La derecha ya no tiene mucho espacio ni tiempo para mantener el nivel de cumplimiento al mínimo ni para la propaganda. El presidente Cristiani no se puede presentar en la próxima asamblea general de Naciones Unidas sin resultados concretos; difícilmente le aceptarán un nuevo discurso cargado de promesas.

El empeño del FMLN y de la comunidad internacional para que el gobierno de ARENA y su presidente cumplan con los acuerdos debe ser secundado por el movimiento social salvadoreño. De hecho, éste ha sido el gran ausente en la negociación y, en la actualidad, su presencia no es determinante en la ejecución de los acuerdos. El movimiento social todavía no ha conseguido articular una respuesta ante la estrategia presidencial y del FMLN. Mientras no lo haga, el presidente y su gobierno fácilmente pueden llegar a pensar que el máximo que les pide la población es el cese del enfrentamiento armado. La sociedad civil debe exigir el cumplimiento de los acuerdos de manera más intensa y organizada, sumando su presión a la del FMLN y de la comunidad internacional, la cual corre el peligro de desgastarse si sus sucesivas intervenciones no tiene un eco en el movimiento social interno.

El FMLN debe tomar más en serio el papel del movimiento social y de las organizaciones populares en el proceso de pacificación. La línea de negociación a nivel de cúpulas no ha favorecido esa participación popular que, contradictoriamente, por otro lado, la misma dirigencia del FMLN reclama para reforzar su posición en la mesa de negociación. Si no se rompe pronto con esta dinámica de negociación a nivel de cúpulas, el FMLN corre el peligro de caer en el mismo verticalismo que padece ARENA, alejándose de las mayorías populares, que son su razón de ser. La participación de las organizaciones populares y de la sociedad civil en general es fundamental para contener la estrategia presidencial y para desenmascarar y aislar políticamente a la derecha.

El FMLN no debe olvidar que, según la última encuesta del IUDOP, lo que la mayoría de la población percibe como problema principal es la dura realidad económica y la falta de expectativa de que mejore. Si el FMLN no logra considerar el apoyo a la población en su lucha por la vida como más importante que su consolidación como partido y si no logra debatir lúcidamente con la población la vinculación que existe entre la desmilitarización del país y unas mejores posibilidades de luchas por la vida, las mayorías populares difícilmente harán sentir su presión para el cumplimiento de los acuerdos y con mucha facilidad se sentirán defraudados por la incapacidad del FMLN para defender sus intereses.

Por el momento, se mantiene el plazo final para el 31 de octubre como una medida para presionar a las partes; sin embargo, ya todos hablan sobre la necesidad de ampliarlo, puesto que es prácticamente imposible cumplir con todos los acuerdos en esa fecha. Si el plazo tuviera que ampliarse, la comunidad internacional debiera establecer unas medidas de supervisión más estrictas y las fuerzas sociales internas debieran hacer oír más clara y articuladamente su voz en favor de la paz, la verdad y la justicia.

San Salvador, 28 de agosto de 1992.